

PUNTO DE VISTA

—Por **Francisco Pérez Mackenna**—
Gerente general de Quiñenco



Sin rentabilidad no hay crecimiento

Un amigo que trabaja en el sector inmobiliario me comentó que el costo por intereses de sus proyectos se había duplicado. La razón: la recepción de obras se estaba demorando y eso le impedía escriturar las ventas en el plazo estimado. No es el único costo adicional que complica los planes de negocio de diferentes industrias. La reducción de la jornada laboral, por ejemplo, aunque esté en su primera etapa, hace que las empresas que miran al largo plazo contemplen en sus proyecciones esa alza, junto con el reajuste de la cotización previsional, nuevos seguros, impuestos y elevadas contribuciones.

Esos mayores costos deben cubrirse con mayor productividad. De lo contrario, caen los márgenes, suben los precios, bajan los salarios reales o se produce una combinación de todo ello. Eso resta capacidad de crecimiento y disminuye la rentabilidad de los proyectos, lo que tarde o temprano golpea la inversión.

Que en la agenda pública no se hable de rentabilidad es un problema. Durante la década pasada y especialmente durante el estallido, en Chile se fue instalando una sospecha profunda sobre la legítima aspiración de obtener ganancias en la actividad empresarial. El término “lucro” se fue cargando de connotaciones negativas, asociándose a abusos o excesos, al punto que algunos convirtieron en slogan o reivindicación ética la frase “no al lucro”. Sin embargo, ¿puede una sociedad aspirar al desarrollo si rechaza la rentabilidad como motor del emprendimiento y la inversión?

La distinción expresa entre “lucro” y “ganancia” no es trivial. Si la búsqueda de beneficios legítimos se demoniza bajo la etiqueta de “lucro”, se corre el riesgo de erosionar el incentivo que impulsa la innovación, la creación de empleo de calidad y el bienestar social. Ese sesgo contribuye a un clima de sospecha hacia quienes, invirtiendo capital y talento, buscan un retorno proporcional a los riesgos que asumieron.

El crecimiento económico, fundamental para financiar políticas sociales, reducir la pobreza o proteger el medio ambiente, es resultado de un ciclo virtuoso donde la inversión, tanto en capital humano como físico, es pieza central. Sin inversión, no hay crecimiento; sin crecimiento, no hay más recursos para redistribuir; y sin rentabili-

dad, no hay inversión.

Los datos son elocuentes: después de que Chile avanzara en ingreso per cápita y reducción de la pobreza impulsado por una combinación de inversión privada, apertura de mercados y políticas públicas enfocadas, desde hace más de una década las cifras muestran una tendencia al estancamiento. El crecimiento promedio del PIB se ha ralentizado y las tasas de inversión han caído por debajo de los niveles necesarios para la sostenibilidad del progreso.

Trabajos recientes, como el informe “El Puente” y “Con permiso para crecer”, coinciden en que retomar la senda del desarrollo pasa, en primer lugar, por recuperar la inversión. Para aspirar a un crecimiento del PIB cercano al 4% —con una población que aumenta apenas al 0,3%, una fuerza laboral al 0,7% y una productividad al 1,25% anual— se requiere que la inversión alcance entre 28% y 31% del producto, como plantea “El Puente”. ¿Cómo alcanzar esa meta si quienes disponen de capital de riesgo no tienen una buena expectativa de rentabilidad y que ésta sea aceptada socialmente?

La aversión política a las ganancias se ha traducido en inestabilidad normativa, incertidumbre jurídica y trabas regulatorias que espantan la inversión privada. El resultado, por nobles que sean las intenciones, es que los recursos necesarios para financiar el gasto social se vuelven escasos y el país entra en una espiral de baja inversión-bajo crecimiento-mayor frustración social.

Para revertir este cuadro es indispensable reconstruir un consenso en torno a la legitimidad de la rentabilidad empresarial, entendida como justa retribución al esfuerzo, la creatividad y el riesgo. Esto implica fortalecer el respeto a la propiedad privada, la igualdad ante la ley, la libertad de emprendimiento y la independencia de los poderes públicos, asegurando reglas del juego claras y estables para todos. También se debe despejar el riesgo del déficit del sector público, de una deuda creciente y de alzas tributarias como fuentes de erosión de rentabilidad futura.

Creer no es un milagro. Es el fruto de decisiones racionales y de un ambiente que reconoce la rentabilidad como el incentivo natural que mueve a las personas a crear, innovar y apostar por el futuro. Legitimar social y políticamente la rentabilidad y hablar de ella sin temor es el primer paso para recuperar la inversión.